



que existe dentro de cada una de nuestras universidades públicas, y dar lugar al uso de la imaginación. Demostrarle a las autoridades que en la universidad pública mexicana existe capacidad de respuesta, capacidad de superar los gobiernos universitarios atrapados entre los usos y costumbres del pasado y de responder a los desafíos del futuro inmediato, que incluye la introducción de nuevas formas de enseñanza e investigación, nuevas formas de relacionarnos con el saber, de generar recursos, de establecer relaciones con el sector productivo, de atraer académicos de alto nivel o estudiantes de otras partes, incluyendo la olvidada dimensión internacional. Esto implica, si nos detenemos a meditar, que podríamos estar ante el desvanecimiento y desaparición de la universidad pública que alguna vez conocimos, para dar lugar al nacimiento de un nuevo tipo de universidad.

Universidad y autonomía: la balada de una relación difícil

Adrián Acosta Silva*

El tema es antiguo pero también complejo, como lo muestran el voluminoso anecdotario, las biografías individuales o las historias institucionales que le acompañan. Los casi novecientos años de la historia de las universidades en el mundo (a partir de la creación de la Universidad de Bologna, en el 1142), recogen una dilatada narrativa de las complicadas relaciones entre el poder y el saber, entre la academia y la política, entre el Estado, los grupos políticos y las universidades. Estas relaciones se han desplazado a lo largo de un eje institucional que va de la heteronomía

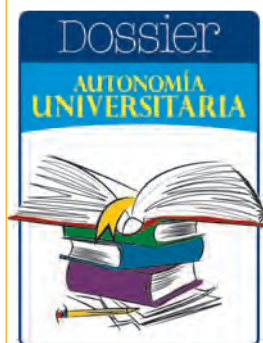
a la autonomía, es decir, de la subordinación hacia un poder externo a la organización universitaria hasta la autodeterminación institucional de sus ordenamientos, libertades políticas y prácticas académicas. Las legendarias historias de cómo la universidad pasó de ser una organización crecida bajo las rígidas reglas y normas de la iglesia católica, a una institución en la que la investigación y la enseñanza quebraron el monopolio epistémico de la fe y lo sustituyeron por una explosiva diversificación de las disciplinas, las artes y las formaciones profesionales, son parte de la difícil y conflictiva construcción de una racionalidad típicamente moderna, en la cual la investigación científica, disciplinaria, contribuyó de manera decisiva a la revolución de la vida económica y social bajo el capitalismo. En ese marco de cambio y transición, configurado por épocas distintas y actores diferentes, la vida política universitaria se desarrolló en una complicada red de relaciones entre estudiantes, profesores y autoridades, patrocinadores y gobiernos nacionales, sindicatos y organizaciones civiles, en la que la disputa por recursos, espacios y representaciones institucionales se resolvió de maneras muy diversas y por los caminos más accidentados.

*Profesor-investigador de tiempo completo del Departamento de Políticas Públicas, CUCEA-Universidad de Guadalajara.

La misma configuración de la autoridad y el orden político en las universidades contemporáneas adquiere formas complejas, extrañas, que van desde el modelo norteamericano de “base académica pesada” organizado en departamentos, con patronatos en el gobierno de las universidades (que incluye figuras como el senado universitario o las Juntas de Notables), hasta la persistencia de modelos napoleónicos basados en la dependencia de las universidades respecto del Estado y gobiernos locales, donde los órganos de autoridad son creados por la necesidad de conciliar la capacidad de representación de los universitarios con la gobernabilidad y la gobernanza institucional, a través de estructuras académicas basadas en la libertad de enseñanza y de investigación del profesorado, orientadas hacia la formación de profesionales y del funcionariado estatal. Las diversas configuraciones empíricamente observables en los distintos contextos nacionales y subnacionales, son el resultado duro de la manera en que la organización de los intereses académicos y las prácticas políticas universitarias distribuyen poder, representación y recursos simbólicos o materiales a sus diversos actores.

En México, la historia de las relaciones entre gobierno y política en la vida universitaria tiene que ver con dos fuerzas poderosas expandidas a lo largo del siglo XX: la autonomía universitaria y las propensiones corporativistas en la organización de los intereses universitarios. La primera de esas fuerzas tiene que ver, a su vez, con dos influencias conflictivas. Una es el pacto construido entre las élites políticas y las élites intelectuales, surgido entre los escombros y la pólvora de la Revolución mexicana, en el que temas como la libertad de cátedra *versus* el compromiso político de la universidad se configuró como el clivaje central de la reorganización universitaria nacional. Justo Sierra, José Vasconcelos, Antonio Caso, Vicente Lombardo Toledano, fueron los intelectuales y políticos que argumentaron en distintos tonos los proyectos de universidad pública en México desde el ocaso del porfiriato hasta el cardenismo. La otra fuerza expansiva provino del sur, con el movimiento reformador de la Universidad de Córdoba en Argentina de hace más de noventa años, en la cual el cogobierno de profesores y estudiantes en la universidad se constituyó como el sello original de la política universitaria en América Latina. La mezcla mexicana incorporó a lo largo del siglo XX otros componentes propios de los contextos estatales en la estructuración de esas relaciones.

Ello explica el surgimiento de diversas autonomías en las universidades públicas mexicanas. Así, por ejemplo, la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional en 1929, y que daría por resultado el surgimiento de la moderna UNAM, significó fundamentalmente dependencia financiera del Estado, pero autonomía académica del gobierno y en la determinación de las formas de admisión estudiantil. Para otras universida-





des, por ejemplo la Michoacana (creada en 1918), la Universidad de Guadalajara (1925) o la Veracruzana (1944), la autonomía no fue sino hasta fechas muy recientes una bandera de identidad institucional, ya que desde los años 20 y hasta los 40 del siglo pasado, se asumieron claramente como universidades de Estado —del Estado de la Revolución mexicana—, ligadas a un proyecto de transformación y legitimación de ese movimiento. No obstante, son instituciones que casi desde el principio ejercieron *de facto* aunque no *de jure* una significativa autonomía académica, política y administrativa respecto de sus gobiernos estatales. Esta complejidad institucional, singular, derivada de los contextos estatales y las historias institucionales, explica el perfil de las autonomías universitarias en México.

Pero la otra fuerza poderosa en la organización de los intereses de los universitarios tiene que ver con la lógica corporativista desprendida de las formas de estructuración del régimen político posrevolucionario. La tendencia hacia la formación de sectores representativos de los intereses y de las demandas como exigencia del régimen político, se mantuvo desde el principio en tensión con la autonomía académica y política de las universidades públicas mexicanas. Las experiencias de las organizaciones estudiantiles universitarias desde los años 30 hasta los 60, el fenómeno del sindicalismo universitario "tardío" en la década de los años 70, la formación de la propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en 1950, representan formas de resolución entre la lógica autonomista universitaria y la lógica corporativista y clientelar del régimen político posrevolucionario.

El movimiento estudiantil de 1968 fue

axial en las relaciones entre autonomía y universidades por varias razones. Por un lado, porque representó una crisis de legitimidad del régimen político posrevolucionario frente a un sector de las clases medias que reclamaba más espacios de participación y representación. Por otro, porque mostró los límites de la autonomía universitaria en un contexto de autoritarismo e intervencionismo gubernamental. Más allá, porque el conflicto y sus resultados presagiaron el agotamiento de una matriz de relaciones basada en un patrocinio "benigno y negligente" del Estado respecto del desempeño y resultados de las universidades públicas. Y finalmente, porque el proceso de expansión no regulado de la educación superior universitaria que inició en la década de los años 60, se desplegaría aceleradamente en los 70 con la creación de nuevas universidades públicas en distintos lugares del país. El resultado global de estos cambios fue la disminución del peso relativo de la UNAM en el sistema universitario público en México, y el impulso a un proceso de desconcentración y descentralización de la matrícula universitaria en varias regiones y estados del país.

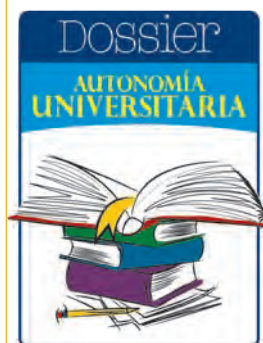
Al finalizar la "década perdida" de los años 80,

en el ámbito universitario mexicano, el financiamiento público de las universidades se convirtió en el tema crítico fundamental. La llegada de una élite modernizadora al poder político (el salinismo) significó colocar en el centro el asunto del financiamiento, pero ligado al tema de la evaluación y, posteriormente, al de la calidad. Este discurso modernizador implicó un cambio en las reglas del juego político de las políticas públicas hacia las universidades. La diferenciación del financiamiento federal en ordinario y extraordinario, ligado al compromiso de las universidades con el cumplimiento de programas específicos, significó un giro en el significado y las prácticas de la autonomía universitaria tradicional. De manera silenciosa y a veces conflictiva, la autonomía universitaria fue transformando su perfil y los actores universitarios se adaptaron de manera pragmática a las nuevas reglas del juego. Un largo ciclo de cambios institucionales de perfiles imprecisos había comenzado y se prolongaría durante dos décadas (1990-2010), con resultados ambiguos y paradojas múltiples.¹

Hoy, en las universidades públicas mexicanas coexisten agendas, actores y grupos que forman relaciones que interactúan

y negocian sus intereses, demandas y exigencias, tratando de construir espacios de acuerdo que permitan tomar decisiones y distribuir recursos siempre escasos. El conflicto es aquí, como en todas las organizaciones, el combustible de la vida política interna, y se destinan tiempo, dinero y recursos para bajar los costos de las transacciones políticas de la vida universitaria, buscando al mismo tiempo, construir reglas de interacción, códigos de comportamiento, incentivos y restricciones, para modular los comportamientos individuales y colectivos. Ello no obstante, pleitos institucionales, crisis de coyuntura o estructurales, derivados de aspectos generales o específicos en la conducción institucional, han producido en los últimos años escenas de ingobernabilidad, violencia y parálisis en las universidades públicas, lo que indica que la vitalidad política universitaria sigue dependiendo del activismo, las ambiciones y los cálculos políticos de sus actores.

Estas escenas de conflicto y poder pueden ser vistas como parte de la colorida variedad de paradojas de nuestra vida pública contemporánea, pero también como la expresión lógica, casi natural, de las formas de asociación que supone la vida universitaria mexicana. La estructuración de la autoridad y del poder aquí como en todas las organizaciones depende de los intereses y los cálculos, las expectativas, el temor, el miedo incluso. La naturaleza académica de la universidad no esconde el juego rudo de intereses, de cabildeos, de formación de ambiciones. En esas circunstancias, la autonomía universitaria realmente existente ha cambiado y se ha hecho más compleja. Las decisiones y los comportamientos institucionales son la expresión rutinaria de una autonomía que ya no es lo que solía ser. La libertad



¹ Para un análisis del periodo, cf. Rollin Kent (coord.), *Las políticas de educación superior en México durante la modernización. Un análisis regional*. ANUIES, México, 2009.



académica, organizacional y política de las universidades públicas —que tradicionalmente estructuraban prácticas flojamente reguladas o supervisadas por parte de las autoridades universitarias—, han cedido el paso a políticas de sobre-regulación basadas en el uso intensivo de incentivos y recompensas simbólicas, materiales y monetarias a las labores docentes, de investigación, de gestión y difusión.

Ahí, en el examen de esas nuevas rutinas y prácticas académicas y de gestión en las universidades, tal vez sea posible identificar el tamaño y magnitud de los cambios en la autonomía universitaria contemporánea. Algunos suelen llamarle “gerencialismo”, otros “capitalismo académico”, algunos más, “efectos del neoliberalismo”. Incluso, ciertas visiones un tanto nostálgicas, miran a la autonomía como un valor que se perdió casi de manera irremediable, aunque frecuentemente suelen evocar un pasado que nunca existió. Sin embargo, bien visto, el nombre no importa demasiado, pues los calificativos suelen ser imprecisos. Lo que es relevante es reconocer que la cosa existe. Y la “cosa” es que la autonomía universitaria de hoy es un concepto en busca de significado, en el que la relación entre las palabras y las cosas ayuden a comprender mejor, o menos peor, lo ocurrido en el pasado reciente de nuestras universidades.

*Alumno del doctorado en Ciencias Sociales con área de especialización en Gobierno y Políticas Públicas, de la UACJ.

Estocadas a la autonomía universitaria en Europa: desde 1960 a la actualidad

Hugo Manuel Camarillo*

Introducción

En este breve ensayo reflexiono acerca de cómo la relación entre el Estado y la educación superior en Europa, a partir de la década de los años 60 y hasta la actual convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se caracteriza por la implantación de políticas públicas que han afectado la autonomía universitaria, por haberse enfocado en ejes como la planeación, el control, el financiamiento condicionado, la evaluación, el mercado, la acreditación, la competitividad y la estandarización. Se presenta un panorama general de dicha relación con el objetivo de argumentar que, no obstante haber transcurrido más de cincuenta años, la autonomía universitaria en Europa sigue sufriendo estragos a pesar de cómo se proyectan sus estructuras educativas.